CONSEJO NACIONAL de DESARROLLO TERRITORIAL

INFORME INTEGRADO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CIUDADANA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

Daniela Aguirre Lyon

Hernán Orozco Ramos

Octubre de 2024

Índice

I. Introducción 2
II. Aspectos Generales 3
1. Metodología 3
2. Ejecución y Participantes 4
III. Descripción de los Resultados de los Talleres 7
1. Desafíos de las Ciudades en Chile 7
2. Avances en los Últimos Años 18
3. Hacia una Visión Compartida 21

Figuras

Figura 1. Distribución de participantes según tipo de actor 5
Figura 2. Distribución de participantes según género y tramos etarios 6
Figura 3. Distribución territorial de participantes 6

Tablas

Tabla 1. Talleres realizados y número de participantes 2
Tabla 2. Síntesis de desafíos 16

I. Introducción

En el marco del proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), se organizaron 16 talleres participativos que abarcaron las diferentes regiones del país, con la participación de más de 500 personas. Estos talleres tuvieron como objetivo principal garantizar la inclusión de una amplia variedad de actores sociales, comunitarios y públicos, promoviendo el diálogo, la deliberación y la co-creación de propuestas. De esta manera, se busca que la versión actualizada de la PNDU refleje las necesidades y aspiraciones actuales del país.

Tabla 1. Talleres realizados y número de participantes

	Taller	Fecha ejecución	Modalidad	Participantes
1	Los Lagos ciudadanía	4 julio 2024	Presencial	26
2	Los Lagos instituciones públicas	4 julio 2024	Presencial	49
3	Departamentos de Desarrollo Urbano e Infraestructura (DDUI) – SEREMIS MINVU	30 julio 2024	Presencial	50
4	Maule ciudadanía	1 agosto 2024	Presencial	37
5	Maule instituciones públicas	2 agosto 2024	Presencial	38
6	Valparaíso ciudadanía	8 agosto 2024	Presencial	37
7	Asesores/as urbanos/as	13 agosto 2024	Online	33
8	Biobío ciudadanía	14 agosto 2024	Presencial	32
9	Tarapacá ciudadanía	22 agosto 2024	Presencial	31
10	Tarapacá instituciones públicas	23 agosto 2024	Presencial	49
11	Funcionarios/as SEREMIS 1	27 agosto 2024	Online	26
12	Funcionarios/as SEREMIS 2	03 septiembre 2024	Online	23
13	Los Ríos ciudadanía	06 septiembre 2024	Presencial	22
14	Funcionarios/as GORE	10 septiembre 2024	Online	16
15	Metropolitana ciudadanía	12 septiembre 2024	Presencial	27
16	Representantes COSOCS	27 septiembre 2024	Online	6

Fuente: Elaboración propia
Nota: El número de participantes del taller DDUI es aproximado.

La metodología empleada en los talleres estuvo orientada a promover la participación de la ciudadanía y de actores institucionales clave, permitiendo la identificación de desafíos, necesidades y oportunidades en cada territorio, así como la generación de una visión compartida de las ciudades deseadas y recomendaciones para proyectar el desarrollo urbano del Chile. Este enfoque permitió recoger tanto las problemáticas locales como las inquietudes emergentes, contribuyendo así a la legitimidad y pertinencia de la futura PNDU.

El presente informe sintetiza los resultados de los talleres realizados, trayendo las perspectivas de los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso. Además, ofrece recomendaciones concretas para la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, basadas en un análisis integral de dichos resultados.

II. Aspectos Generales

A modo de contexto, a continuación se describen los aspectos metodológicos de los talleres, su ejecución y el perfil de los/as participantes.

1. Metodología

El proceso de preparación, desarrollo de los talleres y sistematización de resultados se organizó del siguiente modo:

Convocatoria: La convocatoria se realizó a través de diferentes medios, como correos electrónicos, redes sociales y llamadas telefónicas, con el objetivo de reunir una diversidad de participantes y favorecer la asistencia.

Desarrollo de los Talleres: Los talleres se estructuraron en varias instancias, diseñadas para promover la reflexión, el intercambio de ideas y la co-construcción de propuestas. Cada taller abordó distintas preguntas según el perfil de los/as participantes (ciudadanía o sector público) y la modalidad presencial u online, lo que permitió abarcar una variedad de temas y enfoques para el proceso de actualización de la PNDU.

Los/as asistentes fueron organizados/as en grupos de trabajo y acompañados/as por equipos de facilitadores/as. Las principales instancias grupales (no todas realizadas en cada taller), incluyeron:

- **Diagnóstico de desafíos y problemas emergentes:** En esta instancia inicial, se pidió a los/as participantes que identificaran los principales desafíos, necesidades, dificultades o temas emergentes que enfrentan en sus territorios, y que pueden ser relevantes de contemplar en la actualización de la política. Se procuró de este modo identificar tanto las problemáticas transversales como aquellas más específicas de las distintas regiones o localidades.
- **Afectación de grupos excluidos frecuentemente:** En algunos talleres se complementó este diagnóstico con preguntas para identificar cómo los desafíos locales afectan a diferentes grupos prioritarios, como pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, niños, niñas y adolescentes (NNA), adultos/as mayores, población afrodescendiente, colectivo LGBTQ+ y mujeres. Esta metodología buscó recoger diversas perspectivas para adaptar la política a las necesidades de estos grupos.
- **Cambio climático e impacto de desastres socio-naturales:** Algunos talleres incluyeron también una instancia dedicada a los desastres socio-naturales y el impacto medioambiental. Se discutieron los principales riesgos que afectan a las comunidades, explorando causas y grupos afectados, considerando preguntas como: ¿Qué problemas medioambientales o desastres reconocen en su territorio? ¿Cómo ha afectado el cambio climático? ¿A qué se pueden atribuir estos problemas? Y ¿Qué grupos o sectores están más afectados por estos desastres?
- **Iniciativas y proyectos exitosos:** En esta instancia, propuesta en algunos talleres, se alentó a los/as participantes a identificar y compartir iniciativas, programas o proyectos que ya funcionan bien en sus comunidades. El objetivo fue destacar

iniciativas que contribuyen a ciudades más inclusivas, sostenibles, equitativas y seguras, entre otros atributos.

- **Visión compartida del futuro urbano:** Esta instancia invitó a los/as participantes de algunos talleres a proyectar sus ciudades en el futuro, imaginando cómo sería la ciudad ideal en un horizonte de 10 años (2034). Se trabajó en la construcción de una visión colectiva, fomentando el diálogo sobre las prioridades urbanas y las metas a largo plazo. Las preguntas orientaron la reflexión para definir cómo sería su ciudad ideal en 10 años y qué tendría que ocurrir para alcanzar esa visión.
- **Gobernanza e institucionalidad:** En algunos talleres con funcionarios/as públicos se exploró también cuáles son los desafíos de implementación a la hora de abordar los problemas emergentes de los últimos años y cómo mejorar la institucionalidad y gobernanza para proyectar el desarrollo urbano. Específicamente, se discutió cuáles son las posibles implicancias de los nuevos temas o problemas en términos de implementación e institucionalidad y gobernanza.

Plenario, Cierre y Reflexión: Al finalizar las discusiones, se llevó a cabo una sesión plenaria en la que cada grupo presentó sus principales hallazgos y conclusiones. Esta instancia permitió compartir los resultados entre todos/as los/as participantes y validar colectivamente las propuestas.

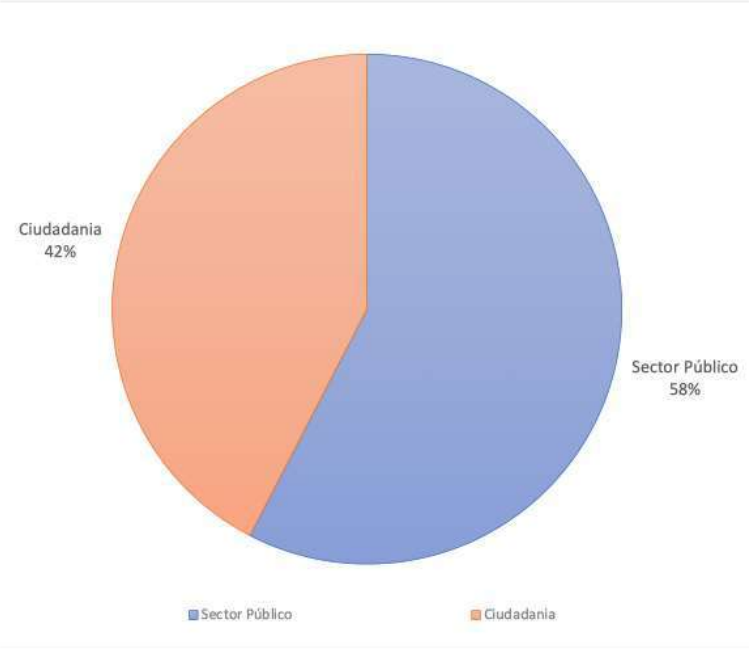
Sistematización: Después de los talleres, y en base a los registros realizados, se sistematizaron los aportes y opiniones de los/as participantes y se elaboraron informes de resultados para cada uno de los talleres.

2. Ejecución y Participantes

Los 16 talleres se realizaron entre julio y septiembre de 2024 en diferentes formatos (presencial y online) y contaron con la participación de más de 500 actores públicos y ciudadanos. Las sesiones presenciales fueron predominantes (11), considerando las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana, mientras que las instancias online se centraron en grupos de funcionarios/as públicos/as como asesores/as urbanos/as de las municipalidades, y profesionales de Gobiernos Regionales y Secretarías Regionales Ministeriales.

La composición de los/as participantes en los talleres refleja el carácter inclusivo y equilibrado que se buscó durante la convocatoria. Se hizo un esfuerzo consciente por involucrar a diversos sectores de la sociedad, garantizando una representación equitativa entre actores públicos y ciudadanos. El 58% de los asistentes provino del sector público, lo que incluyó a funcionarios/as de instituciones gubernamentales y regionales clave para el desarrollo urbano, mientras que el 42% representó a la ciudadanía, asegurando que las voces de las comunidades estuvieran presentes en el proceso.

Figura 1. Distribución de participantes según tipo de actor

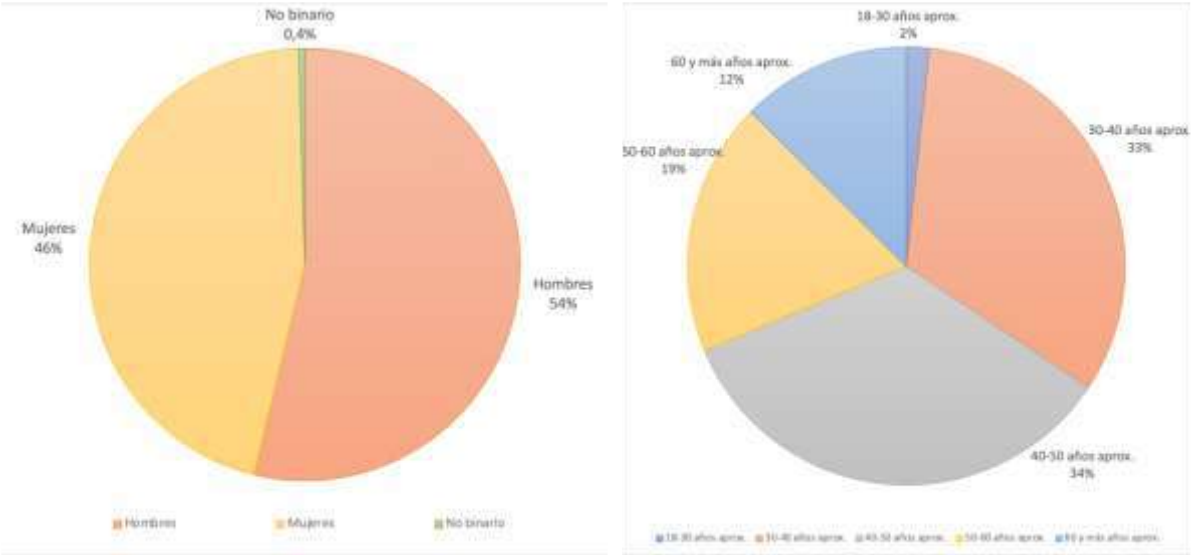


Fuente: elaboración propia

En cuanto a la distribución de género, la participación se caracterizó por un equilibrio significativo: el 54% de los/as asistentes fueron hombres y el 46% mujeres, lo que refleja un esfuerzo por reducir las brechas de género en la discusión pública. Además, un 0,4% de los participantes se identificó como no binario, lo que indica un enfoque inclusivo hacia la diversidad de género. La diversidad de edad también fue un aspecto importante. La mayoría de los/as participantes cuyos datos etarios fueron recogidos estaban en las franjas de 30 a 50 años (67%), lo que representa a una población activa y con experiencia en las temáticas abordadas. Asimismo, el 19% de los/as participantes tenía entre 50 y 60 años, mientras que un 12% eran mayores de 60 años, aportando una perspectiva intergeneracional necesaria para abordar los desafíos a largo plazo en el desarrollo urbano. Solo hubo presencia de algunas personas de 18 a 30 años (2%), lo que desafía la importancia de integrar a jóvenes en la planificación urbana.

Geográficamente, los talleres lograron una cobertura territorial amplia, con una mayor representación del sur del país (56%), seguido de la zona central (23%) y el norte (21%), incluyendo las 16 regiones. Esto demuestra el enfoque territorialmente equilibrado de la convocatoria, buscando que los problemas y desafíos específicos de todas las zonas fueran considerados. Esta diversidad es importante para asegurar que la actualización de la política urbana refleje las realidades y necesidades de distintos territorios, desde las áreas más densamente pobladas hasta las regiones más alejadas y con características socioeconómicas y ambientales particulares.

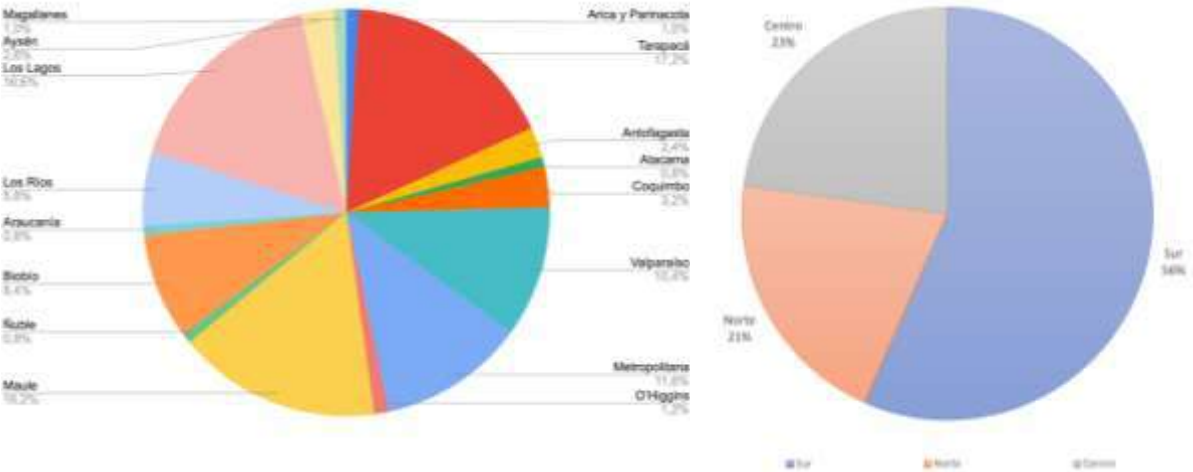
Figura 2. Distribución de participantes según género y tramos etarios



Fuente: elaboración propia

Nota: Los porcentajes se obtienen sobre el total de participantes sobre los cuales se tiene datos de edad y género: 90% del total en el caso de género y 59% en el caso de rangos etarios.

Figura 3. Distribución territorial de participantes



Fuente: elaboración propia

Nota: El Norte considera desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo; el Centro incluye Valparaíso, RM y O'Higgins; y el Sur abarca desde Maule hasta Magallanes.

En resumen, la convocatoria logró un balance en términos de género, sectores y territorios, con la inclusión de grupos diversos, lo que asegura que el proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano sea participativo, representativo y tenga en cuenta las perspectivas de diferentes actores, tanto en lo público como en lo ciudadano.

III. Descripción de los Resultados de los Talleres

Esta sección sistematiza los resultados de los 16 talleres a partir de los informes elaborados para cada uno de ellos, los cuales describen los principales contenidos surgidos de los diálogos y ofrecen orientaciones para la actualización de la política. Cada informe estructuró un análisis coherente de los temas más relevantes, reflejando las discusiones y propuestas de los/as participantes. De este modo, los informes proporcionan una base sólida para la construcción de este diagnóstico agregado, que busca ofrecer una visión integrada de los resultados, trayendo la voz de los actores ciudadanos e institucionales que participaron en el proceso.

1. Desafíos de las Ciudades en Chile

Los talleres han permitido identificar desafíos clave que enfrentan las ciudades en Chile, reflejando la compleja realidad territorial, social, ambiental y económica del país. Entre los problemas más destacados se encuentran la falta de planificación urbana y rural, el crecimiento desordenado, la desigualdad en el acceso a servicios, la problemática habitacional, la deficiente conectividad y movilidad, los impactos del cambio climático y la sostenibilidad ambiental, las barreras para el desarrollo comunitario, entre otros desafíos transversales, que se expresan también con particularidades en cada región. A continuación, se profundiza en estos desafíos.

La **ausencia de una planificación urbana y rural efectiva** es un problema crítico que ha permitido un **crecimiento descontrolado**, especialmente en áreas periurbanas y rurales. Muchos **planes** reguladores comunales están **desactualizados**, y los instrumentos de planificación se perciben **rígidos**, con baja adaptación a las necesidades cambiantes del territorio. Esto ha contribuido al uso desordenado del suelo, presionando áreas productivas y naturales. Por ejemplo, en la Región del Maule se considera necesario actualizar los planes reguladores para promover un desarrollo urbano coherente, mientras que en Concepción y otras áreas del Biobío la planificación requiere de una visión más integral que abarque tanto el desarrollo urbano como la preservación de ecosistemas locales.

Si bien la **regeneración urbana** en áreas centrales deterioradas es necesaria para revitalizar el entorno y mejorar el acceso a servicios e infraestructuras, este objetivo no debe convertirse en una excusa para generar un desarrollo urbano descontrolado que potencie procesos de gentrificación y desplazamiento de residentes. En este contexto, la **especulación inmobiliaria** ha intensificado la **segregación**, dificultando el acceso a viviendas en zonas centrales. Este fenómeno está estrechamente vinculado a la **pérdida del patrimonio cultural**, tanto tangible como intangible. La presión inmobiliaria, junto con la falta de incentivos para la conservación, **han acelerado el deterioro**, mientras que la ausencia de políticas efectivas para proteger la memoria histórica va **debilitando el sentido de pertenencia de las comunidades**. Por lo tanto, la revitalización de los cascos históricos y la implementación de políticas de conservación resultan fundamentales para preservar la identidad cultural y fortalecer la cohesión social.

La falta de una adecuada planificación ha generado también una **distribución desequilibrada de proyectos habitacionales**, creando **áreas desconectadas de los centros de servicios** y afectando negativamente la calidad de vida, especialmente de grupos vulnerables. Las **deficiencias en infraestructura y conectividad**, particularmente en zonas rurales y periféricas, limitan el acceso a servicios básicos y oportunidades, lo que agrava la **desigualdad territorial**. Por ejemplo, en regiones como Los Ríos y La Araucanía, las comunidades rurales enfrentan dificultades debido a la insuficiencia de infraestructura vial. En Tarapacá, la escasez de suelo urbano en Iquique ha provocado la expansión de asentamientos informales en zonas periféricas. En el Maule, el acceso limitado a servicios básicos en áreas rurales y semiurbanas ha profundizado la desigualdad socioespacial.

Lo anterior está estrechamente vinculado al **creciente déficit habitacional**, configurado por la alta demanda de viviendas sociales adecuadas y asequibles, frente a una oferta que resulta insuficiente. La **escasez de suelo y la especulación han elevado los precios**, dificultando el acceso a viviendas dignas, especialmente en zonas céntricas. La **proliferación de asentamientos informales** es un claro reflejo de la falta de opciones habitacionales, que empuja a muchas familias a ocupar terrenos sin servicios básicos, incrementando su vulnerabilidad social. Además, los **proyectos habitacionales en áreas periféricas** agravan la segregación socioespacial.

No obstante, el poblamiento de las periferias no es exclusivo de los grupos vulnerables. La **fragmentación del suelo rural y la proliferación de parcelaciones** ha aumentado la población en zonas rurales y periurbanas, **afectando la sostenibilidad territorial**. En la Región de Los Lagos, por ejemplo, la subdivisión descontrolada de tierras agrícolas ha resultado en la **pérdida de suelos productivos**, una situación que se replica en regiones como Maule, Aysén y Magallanes, donde el crecimiento residencial desordenado y el desarrollo no planificado hacia áreas rurales ejercen presión sobre los recursos naturales y amenazan la sostenibilidad.

Por su parte, los problemas en el **transporte público,** como su **baja calidad y cobertura**, impactan negativamente la movilidad, afectando principalmente a las comunidades vulnerables que dependen de estos servicios. La **falta de planificación integral** fomenta la dependencia del automóvil, incrementa la **congestión vial** y sus efectos contaminantes, y limita la **accesibilidad**. La **conectividad es un desafío crucial** en varias localidades del país. En Iquique y Alto Hospicio, la congestión y la falta de un transporte público eficiente afectan la calidad de vida; en Los Lagos, el aislamiento de comunidades insulares restringe el acceso a servicios; y en el Maule, la deficiente conectividad en áreas rurales limita las oportunidades de desarrollo. Es fundamental adoptar un enfoque de **movilidad sustentable y multimodal** que mejore la conectividad, reduzca el impacto en el medio ambiente y favorezca la equidad en el acceso a servicios y oportunidades.

Otro desafío considerable es la **insuficiente protección del medio ambiente natural**, que contribuye a la **fragmentación de los ecosistemas** y ejerce una creciente **presión sobre los recursos naturales**. La falta de una **planificación** que promueva un crecimiento urbano sostenible y un desarrollo económico que **integre adecuadamente la dimensión ambiental** agrava esta degradación ecológica. Por ejemplo, en Tarapacá, la contaminación derivada de la **minería** afecta los recursos hídricos; en Los Lagos, la **industria salmonera** impacta los

ecosistemas acuáticos y la biodiversidad; y en Biobío, la **actividad industrial** compromete la sostenibilidad de los recursos naturales. Estos ejemplos evidencian la insuficiente protección de los ecosistemas en distintas macrozonas del país. En paralelo, la **gestión inadecuada de residuos sólidos** representa también un problema significativo, ya que la acumulación de desechos genera **contaminación** y pone en riesgo la **salud pública**.

El desarrollo comunitario y local también enfrentan retos importantes. La **escasez de apoyo a proyectos orientados al desarrollo comunitario** afecta la capacidad de las comunidades para prosperar y fortalecer su cohesión social. La **falta de infraestructura** como centros culturales, espacios recreativos y áreas de encuentro, **limita las oportunidades de convivencia ciudadana y desarrollo social.** Estos desafíos son particularmente visibles en regiones como Los Lagos y Maule, donde el desarrollo local se ve obstaculizado por la falta de inversión y recursos. En estas zonas, la ausencia de espacios públicos adecuados y de apoyo a proyectos comunitarios **impide el fortalecimiento del tejido social y el crecimiento sostenible de las comunidades locales**.

Además de los desafíos aquí descritos, se destacan otros cuatro temas centrales que serán abordados en los subcapítulos siguientes. Estos son los **desafíos relacionados con la inclusión** de diferentes grupos, los **retos del cambio climático**, la **institucionalidad y gobernanza**, junto con los llamados **temas emergentes**. Estos aspectos se revisan diferenciadamente, ya que fueron objeto de un diálogo específico durante varios de los talleres realizados, subrayando su importancia en el contexto del proceso de actualización de la política.

1.1 Desafíos Frente al Cambio Climático

El cambio climático plantea desafíos críticos para las ciudades chilenas, especialmente en términos de su **capacidad de adaptación y resiliencia** ante fenómenos cada vez más frecuentes y extremos. Estos desafíos abarcan desde la gestión del agua y la infraestructura resiliente hasta la protección de los ecosistemas y la seguridad alimentaria. A continuación, se sintetizan los principales problemas identificados en relación con el cambio climático y las áreas donde se requiere acción.

El impacto del cambio climático se manifiesta en fenómenos como **inundaciones, remociones de masas e incendios forestales,** que afectan tanto a las zonas urbanas como rurales. Estos eventos representan una amenaza creciente, especialmente para comunidades vulnerables que carecen de infraestructura adecuada. El **bajo mantenimiento de esteros y canales** agrava la situación, incrementando la frecuencia de inundaciones que deterioran la infraestructura urbana y reducen la calidad de vida.

Las **temperaturas extremas** también son un desafío relevante. El cambio climático está creando condiciones que favorecen la formación de **islas de calor**, aumentando la sensación térmica en las ciudades y reduciendo el confort de sus habitantes. En este contexto, la **falta de vegetación** y el **uso excesivo de materiales impermeables** en áreas urbanas agravan el problema. Además, el arbolado urbano se ve frecuentemente maltratado o eliminado para dar paso a infraestructura eléctrica, lo cual genera un impacto negativo en el entorno. Para mitigar estos efectos y mejorar la calidad de vida, las **ciudades necesitan más infraestructura**

verde, como techos y muros con vegetación, que contribuyan a reducir el calor y fomentar un entorno más sostenible.

Otro aspecto clave es la **gestión de los recursos hídricos**, pues la **sequía se ha intensificado** por el cambio climático, afectando gravemente la disponibilidad de agua en muchas regiones. La disminución del caudal de los ríos y el descenso del nivel freático ponen en **riesgo tanto la producción agrícola como el acceso al agua potable**. Las **lluvias concentradas** en periodos cortos durante el invierno y la sequía en verano dificultan la gestión de los sistemas de alcantarillado y aumentan la presión sobre las fuentes de agua, complicando la planificación y la **capacidad de los territorios para afrontar** estos desafíos.

La **pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas** también representan un problema crítico, exacerbado por la actividad humana y el cambio climático. La **destrucción de humedales y la fragmentación de hábitats naturales** amenazan la supervivencia de numerosas especies y afectan el equilibrio ecológico. El desplazamiento de fauna hacia áreas urbanas refleja como la pérdida de hábitats naturales está afectando a la biodiversidad, lo cual subraya la importancia de proteger y restaurar estos ecosistemas.

Los **incendios forestales se han vuelto más frecuentes**, especialmente en las **zonas de interfaz entre lo urbano y lo rural**. La propagación de incendios amenaza tanto la infraestructura urbana como los entornos naturales, lo que resalta la necesidad urgente de implementar **estrategias de resiliencia** que protejan a las comunidades y minimicen los riesgos. Esto incluye mejorar las prácticas de manejo del territorio y asegurar que las zonas periurbanas cuenten con **infraestructura adecuada para prevenir** la expansión de incendios.

En términos planificación e infraestructura urbana, el cambio climático está afectando la capacidad de las ciudades para resistir fenómenos extremos. La **infraestructura vial y energética no está preparada** para soportar los impactos del cambio climático, lo que afecta la movilidad, el acceso a servicios y la seguridad, poniendo en peligro a la población. Los **asentamientos informales en áreas de riesgo** y la **construcción en zonas como humedales**, sin considerar las consecuencias ambientales, ha incrementado la **vulnerabilidad de muchas comunidades** frente a eventos extremos. La **planificación debe incorporar una perspectiva de riesgo adecuada.**

El cambio climático también tiene un impacto significativo en la **seguridad alimentaria y económica**. Las heladas inesperadas y la proliferación de plagas **amenazan la producción agrícola**, lo que compromete la seguridad alimentaria de las comunidades. Los precios de los alimentos suben a medida que disminuye la producción local, generando dificultades para el acceso a alimentos en sectores más vulnerables. Además, el cambio climático está afectando sectores económicos clave como la pesca, lo cual tiene consecuencias en la **estabilidad de los medios de vida de muchas comunidades costeras**.

Finalmente, la gobernanza y participación en el contexto del cambio climático sigue siendo un desafío significativo. La **fragmentación institucional y la falta de coordinación intersectorial dificultan la implementación de acciones efectivas** para enfrentar la crisis climática. Es necesario **fortalecer la participación ciudadana** en la toma de decisiones

climáticas, asegurando que todas las voces, especialmente las de las comunidades más afectadas, sean escuchadas y consideradas en las políticas de adaptación y mitigación. Sin una gobernanza efectiva y una integración real de las comunidades en el proceso de toma de decisiones, los esfuerzos para hacer frente al cambio climático se verán limitados en su alcance y efectividad.

1.2 Desafíos de Inclusión

Las ciudades chilenas enfrentan numerosos desafíos en materia de inclusión, evidenciando **brechas que afectan a diversos grupos vulnerables o frecuentemente no considerados**. La planificación urbana, en muchos casos, no ha incorporado efectivamente las necesidades específicas de estas poblaciones, generando **barreras que limitan su acceso a servicios, espacios públicos y oportunidades.** A continuación, se analizan los principales problemas y desafíos que enfrentan distintos grupos en el contexto urbano chileno.

Las **personas con discapacidad** presentan numerosos desafíos relacionados con la falta de accesibilidad universal en las ciudades. En muchos casos, la infraestructura pública y privada no está adaptada para facilitar su movilidad, con problemas como veredas en mal estado, rampas inexistentes o inadecuadas, y la ausencia de ascensores y otros dispositivos de apoyo. El uso del transporte público también presenta obstáculos significativos, ya que no siempre está preparado para personas con movilidad reducida, lo que perpetúa su exclusión. En este contexto, es fundamental que las ciudades adapten sus espacios públicos y la red de transporte para garantizar que personas con discapacidades auditivas y visuales puedan desplazarse con autonomía y seguridad.

Los/as **adultos/as mayores** requieren entornos urbanos que respondan a sus necesidades físicas y psicosociales. En muchas localidades, la infraestructura no está diseñada para facilitar su movilidad, lo que convierte actividades cotidianas, como cruzar una calle o caminar por una vereda, en riesgos potenciales. La falta de espacios públicos bien adaptados, con bancos y áreas de descanso, afecta negativamente su calidad de vida. Además, la insuficiencia de servicios de salud especializados, junto con el aislamiento que muchas personas mayores experimentan, subraya la necesidad de estrategias que promuevan el envejecimiento activo, la integración comunitaria y el desarrollo de servicios de apoyo domiciliario.

Los **niños, niñas y adolescentes (NNA)** enfrentan diversos desafíos urbanos que afectan su desarrollo y bienestar. La falta de espacios recreativos seguros limita sus oportunidades de juego y socialización, afectando tanto su salud física como mental. Muchas áreas de juego existentes no son accesibles, están mal mantenidas o carecen de las condiciones de seguridad necesarias para prevenir accidentes. Además, el acceso a servicios básicos, como la educación y los espacios culturales, varía considerablemente según el barrio, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. La inseguridad y el temor a la violencia en las calles también restringen sus actividades al aire libre, lo que hace necesario un enfoque de planificación urbana que priorice la seguridad de este grupo. Los entornos urbanos deben garantizar la existencia de espacios educativos, culturales y deportivos, junto con condiciones seguras que permitan a los/as niños/as y jóvenes participar plenamente en la vida comunitaria.

Las **mujeres** enfrentan importantes barreras relacionadas con la falta de infraestructura y condiciones urbanas adecuadas que faciliten su integración y participación activa en la vida urbana. Muchas veces, la violencia de género y la inseguridad en los espacios públicos convierten el simple acto de transitar por la ciudad en un riesgo para ellas, especialmente durante las horas nocturnas. La necesidad de un transporte público seguro y confiable es crucial, ya que muchas mujeres dependen de este para acceder a empleos, servicios de salud y educación, así como para cumplir con responsabilidades familiares. Asimismo, la escasez de servicios de apoyo al cuidado, como centros de cuidado infantil o atención a personas dependientes, limita significativamente la posibilidad de que las mujeres participen en la economía formal y en actividades de desarrollo personal y social.

Las **personas migrantes** enfrentan barreras significativas para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. A menudo, viven en condiciones de hacinamiento y en viviendas informales sin acceso a servicios esenciales, situación que se ve agravada por la discriminación y la falta de políticas de integración efectivas. Su situación de vulnerabilidad se evidencia también a la precariedad laboral, ya que muchas veces sus derechos laborales no son respetados, viéndose forzadas a trabajar en empleos informales y precarios. Además, la exclusión social y el estigma dificultan su plena integración en la comunidad, profundizando las desigualdades que enfrentan.

Los **pueblos indígenas** sufren la falta de reconocimiento y respeto por sus tradiciones y modos de vida en la planificación territorial. Las políticas públicas muchas veces no consideran su cosmovisión, ignorando la importancia del territorio y su relación con la identidad cultural y el patrimonio natural. En zonas urbanas, se enfrentan a barreras para acceder a servicios y oportunidades en igualdad de condiciones, mientras que en zonas rurales, la falta de reconocimiento de sus tierras ancestrales y la presión por parte de actividades económicas (como la minería y la agricultura industrial) amenazan sus modos de vida.

La **comunidad LGBTQ+** enfrenta una discriminación estructural que limita su participación en la planificación y acceso a bienes urbanos. La falta de espacios seguros donde las personas LGBTQ+ puedan expresarse libremente y sin temor a la discriminación sigue siendo un desafío importante. Además, la exclusión en los entornos laborales y educativos, junto con la ausencia de políticas de inclusión específicas, restringe sus oportunidades de desarrollo personal y social. En muchos casos, la violencia y el acoso en los espacios públicos generan un clima de inseguridad, vulnerando su derecho a vivir y transitar libremente por la ciudad.

En resumen, cada uno de los grupos analizados enfrenta desafíos que deben ser considerados en la planificación urbana y territorial. Las ciudades deben adoptar un enfoque de desarrollo inclusivo y equitativo, que promueva espacios accesibles, seguros y diseñados para el bienestar de todas las personas. La adopción de políticas urbanas que prioricen la integración, accesibilidad y seguridad es crucial para avanzar hacia ciudades más justas y equitativas, donde todos/as los/as ciudadanos/as, independientemente de sus características o condiciones, puedan participar plenamente en la vida comunitaria y disfrutar de una mejor calidad de vida.

1.3 Desafíos de Gobernanza e Institucionalidad

La gobernanza y la institucionalidad en Chile enfrentan desafíos significativos que limitan la efectividad de las políticas públicas y obstaculizan la implementación de estrategias adecuadas de desarrollo urbano y territorial. Estos desafíos incluyen la centralización excesiva de las decisiones, la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de una planificación integrada, la insuficiencia de recursos y capacidades técnicas a nivel local, y la falta de una participación ciudadana efectiva. A continuación, se analizan los principales problemas identificados y las áreas que requieren fortalecimiento.

Uno de los impedimentos más destacados es la **excesiva centralización** de la toma de decisiones, que **retrasa** la implementación de medidas clave, aumenta la **burocracia** y reduce la **pertinencia territorial** de la planificación urbana. Muchos procesos requieren autorización del nivel central, lo que limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para responder oportunamente a las necesidades específicas de sus territorios. Además, la **falta de continuidad en la gestión urbana y la ausencia de estructuras institucionales que permitan mantener políticas a largo plazo** debilitan la capacidad de los gobiernos regionales y locales para implementar cambios significativos.

La **descoordinación intersectorial y entre distintos niveles de gobierno** genera una **fragmentación de esfuerzos** y una **visión parcial** de los problemas urbanos. La falta de alineación entre las instituciones públicas conduce a **proyectos incoherentes** y a una **planificación integrada deficiente**, afectando la capacidad de los territorios para enfrentar problemas de manera efectiva. Por ejemplo, la **planificación urbana y rural suele abordarse por separado**, lo que ha llevado a que proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o parques eólicos se sitúen en áreas no adecuadamente planificadas para tales usos. La coordinación entre actores como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) e INDAP es esencial para la protección de zonas agrícolas y forestales y para asegurar un desarrollo territorial equilibrado. Asimismo, la **falta de integración entre la planificación de transporte y los desarrollos urbanos habitacionales** genera barreras en el acceso a servicios y equipamientos e incrementa la congestión vial. La **descoordinación entre instrumentos de planificación en sus distintas escalas**, como planes reguladores comunales, intercomunales y estrategias de desarrollo regional, generan incoherencias y debilitan la visión unificada del territorio.

La **integración de la planificación territorial y la gestión ambiental** también debe fortalecerse y ganar espacio en la agenda de los gobiernos locales y regionales. Los desafíos del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales exigen una planificación urbana que contemple aspectos ambientales, económicos y sociales bajo un enfoque sostenible. Los gobiernos regionales deben asumir un papel más activo en las comisiones de evaluación ambiental y en la planificación de proyectos que afecten el entorno natural y las comunidades.

La **insuficiencia de recursos y capacidades técnicas a nivel local** es otro desafío crítico. Los gobiernos regionales (GORE) y los municipios a menudo carecen de personal técnico adecuado y de recursos financieros suficientes, lo que dificulta el desarrollo de proyectos

significativos, la gestión de la infraestructura urbana y la asunción de nuevas competencias transferidas, **perpetuando la inequidad territorial**. Esta carencia afecta no solo la implementación de políticas, sino también la **capacidad para actualizar y gestionar los planes reguladores comunales**, contribuyendo a la desactualización de los instrumentos de planificación. Como resultado, muchos proyectos se desarrollan con metodologías y normativas que no se alinean con las necesidades actuales del territorio, afectando el desarrollo urbano sostenible.

La **falta de participación ciudadana efectiva** es también un problema que requiere especial atención. Aunque la participación ciudadana es esencial para una planificación urbana inclusiva y representativa, enfrenta limitaciones significativas. La **ausencia de metodologías que permitan la inclusión efectiva** de la ciudadanía y el uso de un **lenguaje técnico difícil** de entender para la mayoría dificultan su involucramiento.

Las **ciudades y localidades chilenas enfrentan desafíos de gobernanza e institucionalidad que varían según su escala y contexto territorial**. En pequeñas localidades, la falta de recursos y capacidades técnicas en los municipios dificulta la planificación y gestión de servicios básicos, afectando su desarrollo. Las ciudades intermedias sufren de descoordinación interinstitucional y falta de integración entre los distintos niveles de gobierno, limitando su capacidad para desarrollar una planificación integral y mejorar la infraestructura. En áreas metropolitanas, la gobernanza centralizada y la ausencia de coordinación metropolitana debilitan la planificación integrada, dificultando la solución de problemas comunes como el transporte y el acceso equitativo a servicios.

El fortalecimiento institucional se presenta como un aspecto central para mejorar la gestión territorial. Es necesario dotar a los gobiernos regionales y locales de capacidades y facultades para planificar y gestionar eficazmente sus territorios. El proceso de descentralización debe estar acompañado de una estructura sólida que permita la viabilidad de los traspasos de competencias y garantice su sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, es importante implementar mecanismos de coordinación entre los actores locales, regionales y nacionales, y avanzar hacia una participación ciudadana más efectiva.

1.4 Desafíos Emergentes

Como último antecedente relacionado con los desafíos, se sintetizan a continuación aquellos que han sido considerado en la ejecución y resultados de algunos talleres como desafíos emergentes. Estos desafíos subrayan la necesidad de adaptar la Política Nacional de Desarrollo Urbano a las nuevas realidades sociales, ambientales y avances tecnológicos que ha tenido el país, y fortalecer la planificación para lograr un desarrollo más equitativo, integrado y participativo.

Uno de los desafíos identificados es el **déficit en la educación cívica y la formación en temas patrimoniales y urbanos.** Existe una falta de conciencia pública respecto a la importancia de preservar el patrimonio y la cultura local, lo cual ha llevado a la degradación de muchos de estos elementos fundamentales para la identidad comunitaria. Esta situación se agrava con la falta de programas educativos, desde la educación formal hasta la acción comunitaria, que

promuevan una cultura de respeto hacia el entorno urbano, resultando en una ciudadanía que no se siente involucrada en la planificación ni en la toma de decisiones.

El **uso de tecnologías emergentes** se presenta como una herramienta clave para enfrentar los desafíos urbanos. Estas tecnologías pueden ser empleadas para mejorar la planificación y la integración urbana, optimizando la distribución de servicios y recursos. El análisis de datos urbanos a gran escala permitiría a los municipios identificar patrones, anticipar problemas y planificar mejor sus intervenciones. Sin embargo, es necesario que estas tecnologías se integren de manera equitativa, asegurando que todas las comunidades tengan acceso a sus beneficios y que las políticas no excluyan a los grupos más vulnerables, quienes podrían quedar atrás en la transición hacia una ciudad más tecnológica. Además, la transformación digital requiere adaptaciones en la normativa y un esfuerzo para capacitar a los/as funcionarios/as locales, de modo que puedan aprovechar de manera efectiva estas nuevas herramientas.

Asimismo, el **aumento de la población migrante** ha generado desafíos significativos, especialmente en términos de acceso a la vivienda y servicios básicos. Como ya se ha mencionado, muchos/as migrantes se enfrentan a dificultades para acceder al mercado formal de la vivienda, lo cual ha resultado en un **incremento de los asentamientos informales** y un **agravamiento del déficit habitacional**. En general, la proliferación de asentamientos informales se ha convertido en un desafío creciente en los últimos años, afectando a diversos grupos vulnerables. Estos asentamientos, a menudo ubicados en zonas de riesgo y con acceso limitado a infraestructura básica, evidencian la falta planificación y de políticas habitacionales efectivas que garanticen viviendas asequibles y un acceso más equitativo a los bienes urbanos. La expansión de los asentamientos también ejerce presión sobre la infraestructura existente y plantea problemas en términos de salud pública y seguridad, afectando la calidad de vida de sus habitantes. Es importante implementar políticas que regulen el crecimiento urbano y promuevan la regularización de estos asentamientos, asegurando condiciones dignas de habitabilidad y la inclusión de la población migrante en las ciudades.

La **gestión de las áreas que interconectan lo urbano y lo rural** es otro de los temas emergentes clave. Estas áreas, conocidas como la interfaz urbano-rural, se encuentran generalmente sin planificación adecuada, lo que genera problemas como el **uso ineficiente del suelo y la falta de servicios**. Es necesario fortalecer la integración y coordinación entre ambos entornos para asegurar un desarrollo armónico. Las políticas de planificación deben considerar la preservación de los valores rurales y garantizar que las zonas periurbanas no se conviertan en territorios rezagados o desatendidos, con una adecuada dotación de infraestructura y servicios que favorezcan tanto la productividad agrícola como el bienestar de la población.

La **gestión del agua y la seguridad alimentaria** se han convertido en temas críticos, especialmente en el contexto del cambio climático. La escasez hídrica, agravada por sequías prolongadas y una deficiente planificación de recursos, afecta no solo la disponibilidad de agua potable sino también la producción agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de muchas comunidades. Es esencial desarrollar políticas de uso eficiente y sostenible del

agua, priorizando la implementación de infraestructura verde y azul que permita la gestión y conservación de este recurso fundamental.

La **seguridad urbana y la cohesión social** son preocupaciones emergentes que requieren atención inmediata. La creciente percepción de inseguridad, junto con el aumento de la violencia y la discriminación en los espacios públicos, afecta el bienestar de las comunidades. Se hace necesario aumentar la inversión en seguridad, mejorar la iluminación pública, fortalecer la presencia policial y asegurar la protección de grupos vulnerables, como mujeres y minorías. Además, la falta de políticas de seguridad urbana que promuevan la cohesión social ha llevado a la fragmentación del tejido social en varias áreas.

Finalmente, cabe destacar la **equidad territorial** que implica ir más allá de la integración social, enfocándose en el desarrollo equilibrado entre áreas urbanas y rurales para reducir las desigualdades en el acceso a servicios y equipamientos básicos. Las comunas rurales y las zonas más apartadas requieren infraestructura y servicios adecuados que eviten la marginación territorial. Esto incluye garantizar el acceso equitativo a servicios de salud, educación, transporte y espacios públicos. Las políticas de desarrollo territorial deben estar diseñadas para promover una distribución justa de recursos, asegurando que ninguna comunidad quede rezagada, independientemente de su ubicación.

1.5 Síntesis de los Desafíos

La siguiente tabla presenta una síntesis de los principales desafíos que enfrentan las ciudades chilenas y el desarrollo urbano, facilitando así la identificación de áreas críticas que requieren atención para la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano.

Tabla 2. Síntesis de desafíos

Desafío		Descripción
Desafíos generales	Falta de planificación urbana y rural efectiva	El crecimiento descontrolado en áreas periurbanas y rurales, sumado a la desactualización de planes reguladores, ha generado un uso desordenado del suelo que presiona áreas productivas y naturales.
	Regeneración urbana y gentrificación	La regeneración de áreas centrales es necesaria pero no debe fomentar la gentrificación, que desplaza a residentes y acelera la pérdida de patrimonio.
	Desigual distribución del desarrollo	La falta de planificación ha creado áreas desconectadas y carentes de servicios, afectando principalmente a grupos vulnerables y profundizando la inequidad territorial
	Déficit habitacional y especulación inmobiliaria	La escasez de suelo y la especulación inmobiliaria han dificultado el acceso a viviendas asequibles, contribuyendo a la segregación y la proliferación de asentamientos informales.
	Crecimiento desordenado en zonas rurales y periurbanas	La fragmentación de suelos rurales y la proliferación de parcelaciones han afectado la sostenibilidad territorial.
	Problemas en el transporte público y conectividad	La baja calidad y cobertura del transporte público afecta principalmente a comunidades vulnerables e incrementa la congestión vial.

Desafío		Descripción
	Protección insuficiente del medio ambiente	La falta de planificación que integre la dimensión ambiental ha contribuido a la degradación de los ecosistemas y los recursos naturales.
	Débil desarrollo comunitario y local	La falta de apoyo a proyectos comunitarios y de espacios adecuados ha limitado las oportunidades de convivencia y desarrollo social, afectando negativamente la cohesión social.
Desafíos frente el cambio climático	Fenómenos climáticos extremos	Inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos climáticos extremos afectan especialmente zonas urbanas y rurales vulnerables.
	Temperaturas extremas e islas de calor	El cambio climático favorece la formación de islas de calor en las ciudades, agravado por la falta de vegetación y el uso de materiales impermeables.
	Gestión de recursos hídricos	La sequía y las lluvias concentradas dificultan la gestión del agua con impacto en la producción agrícola y el acceso al agua potable.
	Pérdida de biodiversidad	La destrucción de ecosistemas y humedales afecta la biodiversidad, requiriendo protección y restauración de ecosistemas.
	Incendios forestales	Los incendios forestales son más frecuentes en áreas de interfaz urbano-rural, requiriendo estrategias de resiliencia para proteger a las comunidades y prevenir la propagación de incendios.
	Falta de adaptación de la planificación e infraestructuras	La infraestructura vial y energética es insuficiente frente al cambio climático, y la falta de regulación adecuada aumenta la edificación y asentamientos en áreas de riesgo.
	Impacto en la seguridad alimentaria y económica	Los efectos climáticos como heladas y plagas amenazan la producción agrícola, afectando la seguridad alimentaria y aumentando los precios, perjudicando a los sectores más vulnerables.
	Gobernanza y participación	La fragmentación institucional, y la falta de coordinación intersectorial y participación ciudadana dificultan acciones efectivas contra el cambio climático
Desafíos de inclusión	Personas con discapacidad	La falta de accesibilidad universal en la infraestructura pública y privada perpetúa la exclusión de las personas con discapacidad.
	Adultos/as mayores	La infraestructura urbana y los servicios no están adaptadas a las necesidades de adultos/as mayores, lo que genera riesgos en actividades diarias y afecta su calidad de vida
	Niños, niñas y adolescentes (NNA)	La falta de espacios recreativos seguros y accesibles limita el desarrollo de niños/as y adolescentes.
	Mujeres	La inseguridad en el transporte y espacios públicos, y la falta de servicios de apoyo al cuidado, limitan la participación de las mujeres en la vida urbana y económica.
	Personas migrantes	Las personas migrantes enfrentan barreras para acceder a servicios básicos y viven en condiciones de precariedad, y la discriminación incrementa su vulnerabilidad.
	Pueblos indígenas	La falta de reconocimiento de sus tierras y modos de vida amenaza la cultura de los pueblos indígenas.
	Comunidad LGBTQ+	La discriminación y la falta de espacios seguros limitan la participación de la comunidad LGBTQ+, afectando su inclusión social y económica.

Desafío		Descripción
Desafíos de gobernanza e institucionalidad	Excesiva centralización de decisiones	La centralización limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para implementar políticas oportunas y pertinentes a las realidades locales.
	Descoordinación intersectorial y entre niveles de gobierno	La falta de coordinación entre instituciones y niveles de gobierno genera incoherencias en la planificación y un abordaje fragmentado del territorio.
	Insuficiencia de recursos y capacidades técnicas a nivel local	Gobiernos regionales y municipales carecen de suficiente personal técnico y recursos financieros para gestionar el territorio.
	Falta de integración de la planificación territorial y la gestión ambiental	La planificación territorial no integra adecuadamente la dimensión ambiental, agravando los impactos del cambio climático.
	Débil participación ciudadana	La participación ciudadana aún es limitada, con metodologías poco inclusivas y lenguajes técnicos complejos.
	Falta de gobernanza en áreas metropolitanas	La falta de coordinación integrada entre comunas de áreas metropolitanas dificulta la solución de problemas comunes.
Desafíos emergentes	Déficit en la educación cívica y formación en temas patrimoniales y urbanos	La falta de conciencia sobre la preservación del patrimonio cultural y urbano ha generado su degradación.
	Uso de tecnologías emergentes	Las tecnologías y el análisis de datos urbanos pueden mejorar la planificación, pero se debe asegurar acceso equitativo.
	Desafíos relacionados con la población migrante	El crecimiento migratorio ha incrementado el déficit habitacional y asentamientos informales, requiriendo políticas más inclusivas.
	Gestión de la interfaz urbano-rural	La falta de planificación periurbana ha generado problemas de uso de suelo y acceso a servicios.
	Gestión del agua y seguridad alimentaria	El cambio climático y la escasez hídrica afectan la producción agrícola y el acceso al agua potable.
	Seguridad urbana y cohesión social	La inseguridad creciente y la fragmentación social requieren inversión en seguridad y políticas de cohesión social.
	Equidad territorial	Es necesario un desarrollo equilibrado entre áreas urbanas y rurales, garantizando el acceso equitativo a servicios, transporte y espacios públicos.

Fuente: elaboración propia

2. Avances en los Últimos Años

Este capítulo examina, recogiendo las opiniones de los/as participantes de los talleres, algunos de los principales avances percibidos en la planificación y el desarrollo urbano del país en los últimos años. Se destacan programas e iniciativas que están funcionando bien y que pueden ser ejemplos a amplificar y replicar, en tanto contribuyen a ciudades más inclusivas, sostenibles, equitativas y seguras, entre otros atributos.

Sobresalen iniciativas en diversas dimensiones, todas ellas necesarias de atender para mejorar la calidad de vida y construir mejores ciudades: desarrollo urbano y habitacional, movilidad y accesibilidad, infraestructuras y espacios públicos, medio ambiente y prácticas

sostenibles, inclusión económica y laboral, salud y cuidados, participación ciudadana, desarrollo comunitario e identidad cultural.

Los avances destacados en **planificación** abordan de manera conjunta la vivienda y su entorno urbano. Ejemplo de ello es la implementación de Planes Urbanos Habitacionales, que desarrollan **proyectos habitacionales integrados con la planificación urbana**, favoreciendo el acceso equitativo a equipamientos y servicios. El Programa Pequeñas Localidades también ha contribuido a **mejorar la calidad de vida en localidades menores**, con desarrollo habitacional y servicios básicos que ayudan a reducir el éxodo rural. El Banco de Suelo se ha destacado como una herramienta esencial para facilitar el acceso a terrenos destinados a viviendas asequibles, lo que ha permitido una **mejor planificación y distribución del desarrollo urbano**. Además, la Ley de Aporte al Espacio Público ha sido un instrumento clave para garantizar que los desarrollos habitacionales incluyan **infraestructura urbana y áreas comunes** que favorezcan el bienestar de las comunidades.

En respuesta a la creciente necesidad de viviendas adecuadas, se destaca la implementación del Plan de Emergencia Habitacional, que ha sido fundamental para proporcionar **viviendas seguras y accesibles** a grupos vulnerables. Los Proyectos Habitacionales con Localización Adecuada han logrado evitar la segregación social al garantizar la proximidad a servicios básicos y equipamientos, favoreciendo la **integración de los/as residentes en la vida urbana**. El Programa de Reacondicionamiento Térmico de Viviendas ha permitido mejorar la **eficiencia energética** y la **habitabilidad**.

Además, programas como Pavimentos Participativos y la construcción de espacios públicos han mejorado la **calidad del espacio urbano**, siendo también ejemplos efectivos de cómo la **participación ciudadana** puede contribuir a mejorar la infraestructura local y aumentar el **sentido de pertenencia**. Espacios públicos destacados, como el borde costero de Iquique, el Parque Luis Ebel en Puerto Montt y otros proyectos de áreas verdes en diversas comunas, han ofrecido a las comunidades lugares seguros, accesibles y bien mantenidos para la **recreación** y **convivencia**. Estos espacios no solo mejoran el bienestar físico y mental de los/as residentes, sino que también fomentan la interacción social, fortaleciendo el **tejido comunitario** y la **cohesión social.**

El avance en **accesibilidad y movilidad sostenible** se refleja en iniciativas como el Proyecto de Accesibilidad Universal, que al impulsar las infraestructuras públicas accesibles para personas con discapacidades, subraya la importancia de una **movilidad inclusiva** en la planificación urbana. La instalación de semáforos con pulsadores para personas no videntes y los subsidios al transporte escolar han favorecido también la **inclusión de diversos grupos** de la sociedad. El sistema de transporte regulado y la renovación de flotas han ayudado a mejorar la **eficiencia y accesibilidad del transporte** público.

Los proyectos de conectividad regional han sido vitales para mejorar la **integración territorial** y contribuir a una movilidad más equitativa y sostenible. Un ejemplo destacado es el Tren Llanquihue - Puerto Varas - Puerto Montt, que ha mejorado considerablemente la conectividad regional, fomentando el **uso de transporte público** y reduciendo la dependencia de automóviles privados. Este tipo de proyecto no solo facilita la movilidad interurbana, sino

que también promueve una mayor integración entre las áreas rurales y urbanas, **abriendo oportunidades económicas y sociales** para comunidades que antes estaban más aisladas.

La Ley de Humedales Urbanos y otros programas de conservación del paisaje han jugado un papel esencial en la protección de ecosistemas críticos en zonas urbanas, **preservando la biodiversidad** y contribuyendo a la **resiliencia frente al cambio climático**. Además, destacan iniciativas que fomentan la **conciencia ambiental** y la **participación ciudadana** en la protección del entorno natural. Los huertos urbanos han permitido fortalecer la **seguridad alimentaria** y promover **prácticas sostenibles** de producción de alimentos. Programas como 'Ta Buena Tu Leña Seca' en Purranque han fomentado el **uso de fuentes de energía más limpias**, como la leña seca, para reducir la contaminación del aire, un problema particularmente grave en algunas regiones del sur de Chile. Estas medidas no solo mejoran la calidad de vida de los/as habitantes, sino que también refuerzan el compromiso con la sostenibilidad a nivel local.

El **fortalecimiento de la participación ciudadana** ha tenido un papel importante con iniciativas como las mesas territoriales y barriales, que promueven el protagonismo de las comunidades y la **toma de decisiones locales**. Asimismo, programas como Quiero Mi Barrio se han destacado por su **enfoque integral en la revitalización**, mejorando tanto la infraestructura física como el tejido social. Estos espacios de participación activa han contribuido al **empoderamiento de las comunidades** y a reforzar la identidad y el **sentido de pertenencia**.

La Ley 21.015 de Inclusión Laboral y los programas de fortalecimiento del emprendimiento femenino han tenido un impacto significativo en la **inclusión laboral** y el **desarrollo económico**, en especial para las **mujeres**. La implementación de salas cuna y jardines infantiles con extensión horaria ha sido clave para **apoyar a las familias** trabajadoras, facilitando la **participación laboral de padres y madres**. Además, los programas de capacitación comunitaria han ofrecido a los/as ciudadanos/as nuevas habilidades y conocimientos relevantes para el mercado laboral, aumentando sus **oportunidades de desarrollo**.

En términos de **bienestar y salud**, la inversión en infraestructura sanitaria ha sido clave. El Hospital Regional de Puerto Montt es un ejemplo emblemático de cómo la expansión y modernización de servicios de salud puede mejorar el acceso a cuidados médicos de calidad en zonas donde la infraestructura previa era insuficiente. Por su parte, el Programa de Electrificación Rural ha garantizado el acceso a energía en áreas remotas, mejorando las condiciones de vida de muchas comunidades.

Los avances en relación a distintos **grupos prioritarios** reflejan esfuerzos hacia la inclusión y el fortalecimiento de los cuidados. En cuanto a las **personas con discapacidad**, la implementación del Decreto 50 de Accesibilidad Universal y la Ley 20.422 han mejorado la **accesibilidad** en infraestructura y servicios, lo que fomenta una mayor **inclusión y equidad en el uso de los espacios públicos**. Para los/as **adultos/as mayores**, iniciativas como las Viviendas Tuteladas, los Centros de Larga Estancia (ELEAM) y el Programa Asiste, ofrecen **soluciones habitacionales** y **servicios de cuidados** a una población que a menudo no cuenta

con redes familiares de apoyo. Estas iniciativas están alineadas con el **envejecimiento** de la población chilena, un desafío que debe ser considerado en la actualización de políticas públicas. Respecto a las mujeres y el empleo, los Programas de Emprendimiento Femenino y la capacitación laboral han sido clave para promover el **desarrollo económico y la autonomía de las mujeres**, incrementando su participación en el ámbito laboral. Por su parte, las concesiones otorgadas a comunidades indígenas han apoyado la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a la **preservación de sus territorios** y la protección de la **biodiversidad**. Estos esfuerzos por preservar y promover la **cosmovisión de las comunidades indígenas**, también se reconocen esenciales para fortalecer la diversidad cultural en el país. A esto se suman actividades recreativas y culturales que integran a personas migrantes y pueblos originarios, fomentando el respeto por la diversidad. En este sentido, el reconocimiento de la **multiculturalidad** se torna esencial para el desarrollo de ciudades más inclusivas y la cohesión social.

3. Hacia una Visión Compartida

En varios de los talleres participativos, tanto con actores ciudadanos como institucionales, se intentó construir una visión futura de las ciudades que respondiera a las necesidades de sus habitantes de manera integral. En base a los resultados de estos talleres, en esta sección se desarrollan los elementos centrales de la visualización colectiva de la ciudad ideal al 2034, recogiendo los sueños y proyecciones de los/as participantes.

- **Ciudad Sostenible y Resiliente**

La **sostenibilidad** es un eje central en la construcción de una ciudad ideal. Esta visión propone minimizar el impacto ambiental a través del uso generalizado de **energías renovables**, como la energía solar y undimotriz. Asimismo, se prioriza la creación de redes de **espacios públicos verdes, parques e infraestructuras que respeten los ecosistemas naturales**, como humedales y bordes costeros. Esta integración entre la naturaleza y el entorno urbano se reconoce también como una forma de mejorar la calidad de los/as habitantes, promoviendo la **salud y el bienestar**.

La **autosuficiencia económica** es también una aspiración de esta visión compartida. Fomentar **ciudades autosustentables** que minimicen la dependencia de recursos externos y desarrollen su economía de manera sostenible, impulsando el **crecimiento económico sin comprometer el medio ambiente**. En esta línea, se contempla también la promoción de políticas eficaces de **gestión de residuos y reciclaje**.

En un entorno cada vez más dinámico y cambiante, la **capacidad de resiliencia y adaptación de las ciudades** permiten garantizar el bienestar de sus habitantes y avanzar hacia un desarrollo sostenible. En este sentido, la **planificación adaptativa y flexible** se hace necesaria para enfrentar desafíos emergentes y aprovechar nuevas oportunidades. Las ciudades deben poder responder a los cambios ambientales, económicos y sociales, adaptando sus políticas y proyectos.

- **Ciudad Inclusiva, Equitativa y Segura**

Una ciudad verdaderamente **inclusiva** es aquella que involucra activamente a sus ciudadanos/as en la toma de decisiones. En esta visión de ciudad, la **participación ciudadana** activa es un pilar fundamental. No se trata únicamente de realizar consultas formales, sino de establecer un proceso continuo en el que los/as ciudadanos/as contribuyan a definir y evaluar proyectos, asegurando que sus voces tengan un impacto real. Este enfoque permite construir una ciudad que **respeta y valora la diversidad cultural, étnica y generacional**, integrando estas diferencias como parte esencial de su identidad urbana.

La **equidad** en el acceso a servicios es fundamental para asegurar una buena calidad de vida. La visión compartida contempla un **acceso igualitario a servicios de calidad**, como salud, educación y servicios esenciales, y una **descentralización** de estos servicios para **reducir las disparidades entre zonas centrales y periféricas**. Esta equidad contribuye a que todos/as los/as ciudadanos/as, independientemente de su ubicación geográfica, puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

La **seguridad** es otro aspecto clave de esta ciudad ideal. La creación de **entornos seguros y bien iluminados** es una prioridad para asegurar la tranquilidad de todos/as los/as habitantes. Los **espacios recreativos activos**, que incluyen áreas deportivas y culturales, fomentan la cohesión social y brindan a la población un lugar donde desarrollarse integralmente. Una ciudad segura es, por tanto, aquella que proporciona protección junto con espacios de encuentro.

- **Infraestructura para el Siglo XXI con Respeto a la Identidad Local y el Patrimonio**

Se proyecta una ciudad con **infraestructura de alta calidad**, **adaptada a las necesidades de sus habitantes y resiliente** frente a los desafíos climáticos. La visión compartida considera el desarrollo de una infraestructura que mejore la **conectividad** entre comunas y asegure un acceso equitativo a servicios y oportunidades. Esto incluye la mejora del **transporte público**, la construcción de **ciclovías**, la **modernización de infraestructuras** urbanas y el aprovechamiento de **nuevas tecnologías** para garantizar así una ciudad conectada y preparada para los desafíos futuros.

Se contempla una **red de movilidad de calidad**, que facilite el acceso y la conectividad de todas las áreas de la ciudad, y proporcione un entorno más amigable para el desplazamiento de **peatones y ciclistas**. Se proyecta un sistema de **transporte intermodal** que integre los distintos modos, como trenes, buses eléctricos y ciclovías, reduciendo la dependencia del automóvil y facilitando el desplazamiento seguro y eficiente de todos/as los/as ciudadanos/as.

La **accesibilidad universal** se convierte también en una prioridad, asegurando que tanto los espacios públicos como la infraestructura de transporte sean accesibles para personas con discapacidad y de todas las edades. Este enfoque permite construir una ciudad en la que todos/as puedan disfrutar de la misma calidad de vida y oportunidades.

Esta modernización de las infraestructuras no debe olvidar la importancia del reconocimiento y promoción de las **identidades locales**. La visión compartida incluye la creación de **espacios para la cultura y las tradiciones**, donde las comunidades puedan expresarse y celebrar su herencia cultural. El respeto por la **cosmovisión de los pueblos originarios** y por la **diversidad cultural** contribuye a construir una identidad urbana rica y diversa, fortaleciendo la cohesión social.

- **Desarrollo integral y gestión colaborativa**

La aspiración al desarrollo del territorio de manera integral es un aspecto central de esta visión. Se busca asegurar el **acceso equitativo a viviendas dignas, servicios y oportunidades** en todo el territorio, **eliminando las barreras entre ciudadanos/as** de "primera y segunda clase".

Se refleja una visión territorial unificada, que promueve el desarrollo de **áreas urbanas y rurales de manera integrada**, garantizando un desarrollo equilibrado. Aspectos como la conectividad regional y la **planificación integrada de la movilidad**, son fundamentales para asegurar que todas las áreas estén conectadas de manera eficiente, incluidas las periferias y las zonas rurales.

Asimismo, la **gestión colaborativa del territorio** se destaca como un pilar esencial. Actores públicos, privados y comunitarios deben trabajar juntos en la planificación, alineando intereses y metas comunes. Esta colaboración favorece que las decisiones se tomen con una perspectiva amplia e inclusiva, considerando las particularidades de cada territorio y fomentando un desarrollo urbano equitativo. La **coordinación entre distintos niveles de gobierno y sectores** es vista como esencial para la implementación de una planificación eficiente y sostenible.

Esta visión es un paso esencial hacia la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo para las ciudades chilenas, y se complementa con una serie de recomendaciones propuestas por los/as participantes y organizadas en los reportes de resultados, orientadas a enfrentar los desafíos, mejorar el desarrollo urbano y acercarse al cumplimiento de esta visión.

3.1 Recomendaciones en temas específicos

Se comienza esta sección presentando las principales recomendaciones que abordan los retos relacionados con la protección del medioambiente, el desarrollo tecnológico y económico, el fortalecimiento de la seguridad y la justicia, el desarrollo cultural y comunitario, el acceso a viviendas y servicios, y la movilidad urbana; todos estos temas considerados como desafíos que enfrentan las ciudades chilenas. Se presentan luego las recomendaciones para la implementación de una planificación urbana y territorial más efectiva y el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza.

La **sostenibilidad medioambiental y la gestión de los recursos naturales** requieren de una planificación que respete y valore los ecosistemas. La promoción de energías limpias y sostenibles es importante para reducir la dependencia de recursos no renovables y minimizar el impacto ambiental. Además, se deben establecer políticas para la protección de los suelos y recursos naturales, así como promover una gestión eficiente de residuos y reciclaje. La protección de la biodiversidad y las zonas verdes urbanas debe ser un componente esencial de la política urbana, no solo para mejorar la calidad del aire y del entorno, sino también para incrementar la resiliencia de las ciudades ante los efectos del cambio climático. Campañas educativas dirigidas a la comunidad pueden ser efectivas para fomentar prácticas de cuidado ambiental, que aseguren un desarrollo urbano en armonía con el medioambiente.

El **desarrollo económico y tecnológico** es esencial para la creación de ciudades sostenibles y competitivas. La promoción de mejores ciudades mediante el uso de tecnología avanzada y la inversión en investigación y desarrollo (I+D) son elementos fundamentales para avanzar hacia una economía urbana moderna. Sin embargo, es relevante que estas políticas estén alineadas con un enfoque de equidad, mediante el establecimiento de políticas fiscales que promuevan tanto la inversión tecnológica como la justicia social. Además, la responsabilidad social y ambiental de las empresas privadas debe ser fomentada y regulada, de manera que su participación en el desarrollo urbano no solo beneficie a sus intereses económicos, sino también contribuya al bienestar colectivo y a la sostenibilidad del territorio.

También es necesario que las **nuevas tecnologías sean accesibles para todos los sectores** de la población y que se capacite a los/ funcionarios/as públicos y a la ciudadanía en su uso. La infraestructura digital debe ser mejorada para asegurar que todas las comunidades puedan beneficiarse de las tecnologías emergentes.

La **seguridad y la justicia** representan aspectos centrales para la calidad de vida urbana. Para fortalecer estas áreas, se propone incrementar la autoridad y los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, así como instalar tecnologías de seguridad, como botones de pánico y cámaras en zonas críticas. A su vez, se requiere mejorar la eficacia del sistema de justicia, asegurando que las leyes y regulaciones se implementen de manera equitativa y eficiente.

El **fortalecimiento de la identidad regional y el desarrollo cultural** son fundamentales para construir ciudades inclusivas y cohesionadas. Esto implica reconocer y fomentar las particularidades locales mediante proyectos culturales y la creación de espacios públicos que promuevan la interacción comunitaria. Es esencial que estos espacios sean accesibles e inclusivos, permitiendo a toda la comunidad disfrutar de actividades culturales y recreativas.

Garantizar el **acceso igualitario a una vivienda digna y a servicios** fundamentales como agua, electricidad, salud y educación, es uno de los grandes desafíos para lograr ciudades más justas. La implementación de políticas públicas que aseguren la provisión de estos servicios, así como el desarrollo y mantenimiento de áreas verdes y parques, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir las desigualdades territoriales.

El **transporte y la movilidad** son claves para garantizar la conectividad y el acceso a oportunidades dentro de las ciudades. La movilidad debe ser vista como un derecho y, por lo

tanto, se debe garantizar el acceso igualitario a sistemas de transporte eficientes y sostenibles. La implementación de un plan integral de transporte que modernice la infraestructura vial y fortalezca el transporte público y multimodal es esencial para reducir la dependencia del automóvil y asegurar la conectividad de zonas periféricas y rurales. Además, se deben fomentar modos de transporte no motorizados, como las ciclovías y el desplazamiento peatonal, promoviendo una movilidad más sostenible y accesible.

3.2 Recomendaciones para mejorar la planificación urbana y territorial

Para avanzar hacia un desarrollo que pueda implementar estas mejoras y responder a los distintos desafíos abordados en los talleres, se requiere fortalecer la planificación.

Es necesario **mejorar los instrumentos de planificación territorial**, como los planes reguladores comunales e intercomunales. **Actualizar** estos instrumentos es necesario para **adaptarse a las dinámicas cambiantes del territorio** y generar un mejor alineamiento con las necesidades de las comunidades y los desafíos emergentes como el cambio climático y la migración. Además, la **fiscalización debe mejorar** para asegurar que las políticas no solo se diseñen bien, sino que se implementen de manera efectiva y con los estándares de calidad necesarios. En este sentido, se debe dotar de recursos y capacidades a los municipios para que puedan aplicar efectivamente los instrumentos de planificación. Se requiere también una mayor **transparencia y control** en el proceso de ejecución de proyectos, así como la **participación** de la ciudadanía en la fiscalización para asegurar que las obras respondan a sus necesidades.

Es fundamental que todos los **instrumentos de planificación "conversen entre sí"** y que la aprobación de proyectos se lleve a cabo de manera coordinada y ágil, evitando duplicaciones y contradicciones entre diferentes niveles de planificación. La coherencia entre los planes reguladores comunales e intercomunales es clave para una gestión efectiva del territorio. La inclusión de **herramientas modernas y tecnologías** para el análisis territorial puede facilitar la **integración entre los diferentes niveles de planificación** y **responder mejor a los desafíos emergentes**.

Asimismo, la planificación territorial debe **contemplar las particularidades de cada territorio**. Reconocer la diversidad y adaptar los planes a las realidades locales permite una mejor gestión de los recursos y una planificación que realmente responda a las necesidades regionales y comunales.

La **planificación territorial debe integrar la base medioambiental** como un componente clave, incluyendo el diagnóstico y la categorización del territorio desde una perspectiva ecológica. La **protección y gestión de la biodiversidad** y la **adaptación a los riesgos climáticos** son fundamentales para un desarrollo urbano sostenible y resiliente. La planificación urbana debe estar en constante interacción con otros instrumentos que permitan incorporar dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Además, la **regulación de la interfaz urbano-rural** y la **atención a los asentamientos irregulares** son aspectos prioritarios para garantizar un desarrollo equitativo y reducir la

informalidad. Los instrumentos de planificación deben **promover la integración y reducir las desigualdades territoriales**, fomentando la cohesión entre áreas urbanas y rurales.

Para la implementación de **sistemas de movilidad efectivos y sostenibles** se debe planificar de **manera integrada y adaptada** a las necesidades de los territorios, considerando la participación de distintos sectores. Además, la planificación integrada debe contemplar **mecanismos para regular el valor del suelo y prevenir la especulación inmobiliaria**, asegurando el acceso a la vivienda y a los servicios básicos.

3.3 Recomendaciones para la gobernanza e institucionalidad

La gobernanza e institucionalidad abarcan también una serie de propuestas enfocadas en mejorar la efectividad de la gestión urbana y territorial de manera transversal.

Aunque el concepto de **gobernanza** se ha popularizado, su aplicación práctica sigue siendo limitada. Es necesario definir formalmente el concepto de gobernanza para que tenga un impacto real en el desarrollo. La gobernanza no debe percibirse como algo abstracto, sino como un **mecanismo concreto y operativo** que garantice una implementación efectiva de las políticas urbanas y territoriales. Una gobernanza efectiva debe tener una estructura y reglas claras que definan los actores involucrados, roles y responsabilidades, promoviendo un **enfoque colaborativo** que incluya la participación activa y coordinación entre diferentes actores, como el sector público, la sociedad civil, el sector privado y la academia.

En este sentido, es importante fortalecer la **coordinación entre los organismos estatales** para una implementación más articulada de políticas y proyectos, evitando la duplicación de esfuerzos o contradicciones. Una **mejor comunicación y metas comunes** pueden ayudar a un desarrollo más integrado del territorio. Se requiere también una **acción coordinada a nivel nacional, regional y comunal**, potenciando a su vez la **descentralización** para una mejor gestión de los recursos y adaptación a las realidades locales. Se deben definir **roles claros** y modelos de gobernanza que otorguen **mayor autonomía a los órganos subnacionales**, fortaleciendo a los **Gobiernos Regionale**s con mayores atribuciones y capacidades técnicas.

La **inclusión ciudadana y la participación vinculante** en la toma de decisiones son elementos relevantes para asegurar una gobernanza efectiva. Los mecanismos de participación deben ser implementados desde etapas tempranas de la planificación, permitiendo que las **voces de las comunidades sean escuchadas y reflejadas en las políticas públicas**. Esto es especialmente relevante para los grupos históricamente excluidos, cuya participación debe ser fomentada de manera activa. La creación de **mesas de trabajo** regionales constituye una herramienta clave para garantizar que las decisiones reflejen las necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad en el desarrollo territorial.

Sin embargo, para que estos espacios sean efectivos, es fundamental **asignar recursos** específicos destinados a fomentar la participación. Es importante también adoptar **metodologías** que faciliten la participación ciudadana, utilizando un lenguaje accesible y estrategias de **comunicación inclusivas**. La **educación** tiene un papel fundamental para

informar a la ciudadanía sobre los procesos de planificación y sensibilizar sobre la importancia de la evaluación social de proyectos y los impactos del desarrollo urbano.

Se platea como necesario fomentar una cultura de participación que **empodere a los/as ciudadanos/as**. La implementación de programas de **educación cívica** y talleres participativos puede contribuir significativamente a este objetivo. Además, se debe **capacitar a los/as funcionarios/as públicos** en habilidades comunicativas para facilitar la interacción con la ciudadanía.

Por su parte, la **modernización del Estado** es otra recomendación esencial para enfrentar los desafíos. Esto implica mejorar las **capacidades técnicas** de los/as funcionarios/as públicos e incorporar **nuevas tecnologías para la gestión territorial**. La digitalización y el uso de conceptos de **ciudades inteligentes** permiten una planificación más precisa y optimizada, facilitando la toma de decisiones basada en datos. La transformación digital del Estado debe enfocarse en mejorar la **eficiencia administrativa** y en la implementación de **plataformas tecnológicas** que permitan una mejor comunicación entre los distintos niveles de gobierno.

En este sentido, el uso de herramientas como la **inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías** emergentes tienen el potencial de transformar la planificación urbana. El uso de herramientas como Big Data y la cartografía digital puede **facilitar la identificación de patrones, mejorar la capacidad predictiva y optimizar la asignación de recursos**. Asimismo, la implementación de **plataformas integradas** que faciliten el acceso a la información y la coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar que la modernización del Estado tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as.